

COMPROMISO UNITARIO POR UN NUEVO PACTO SOCIAL

Las organizaciones campesinas, sindicales, civiles y políticas, así como las personalidades de diversos ámbitos presentes en esta **Jornada**, manifestamos ante la Nación nuestra firme convicción de agotar todos los recursos legales y políticos, para revocar las reformas estructurales neoliberales aprobadas en los últimos días del 2012 y durante todo el 2013, **comenzando por la Reforma Energética que entrega un recurso natural no renovable y estratégico a los grandes capitales nacionales y extranjeros, además de profundizar la privatización en la generación de electricidad.**

Para cumplir con este propósito hemos dejado en segundo plano las diferencias de diversa índole que nos separan, para colocar al frente el interés superior de nuestra Nación, hoy en día amenazada por la inminente aplicación de ordenamientos que **destruyen la soberanía de nuestro país, agudizando la subordinación del mismo ante los intereses de las grandes corporaciones globales.**

Con la aprobación de las Reformas Estructurales y la consolidación de las asociaciones público-privadas, modalidad actual de las privatizaciones, se cierra el ciclo de inserción subordinada, inequitativa y desigual con el mercado Norteamericano, iniciada hace dos décadas por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), proceso que pretenden coronar con la suscripción del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP). Todo ello a costa de los derechos sociales y los niveles de bienestar de la mayoría de la población.

A pesar de las promesas del gobierno federal en el sentido de que las condiciones de vida y de trabajo del pueblo en general van a mejorar con las reformas impuestas, la realidad que vivimos cotidianamente es totalmente diferente, ya que las modificaciones constitucionales recientes profundizan la desigualdad, la discriminación y la pobreza, lo que afecta en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes.

Denunciamos que dichas Reformas se han llevado a cabo en medio de un tremendo desaseo parlamentario y sin considerar la opinión de millones de ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Estos hechos cuestionan la legitimidad y la legalidad de tales disposiciones, a todas luces injustas y contrarias al interés de la Nación.

Este paquete de contrarreformas constitucionales vulnera derechos humanos fundamentales en distintos ámbitos como el educativo, el de la seguridad social, el del acceso a las nuevas tecnologías de la información o el laboral; incrementa la carga fiscal de los contribuyentes cautivos de menores ingresos y cancela de tajo la opción de utilizar nuestros recursos naturales e industrias estratégicas, para impulsar el desarrollo nacional bajo condiciones de justicia y equidad. **Además crea un nuevo e incontrolable poder de facto encarnado por las grandes compañías trasnacionales del petróleo.** Por todo lo

anterior, hemos insistido en señalar que estas trascendentales modificaciones deben someterse necesariamente a consulta de la ciudadanía.

No ignoramos que aquellos que en los últimos treinta años se han dedicado a promover sin descanso las políticas neoliberales, se aprestan hoy a neutralizar la figura de la consulta ciudadana, introduciendo en la ley reglamentaria disposiciones que la volverían impracticable o que evitarían que las reformas en curso puedan verse afectadas por su aplicación, lo que se ha venido acompañando con una insistente campaña de medios para convencer a la ciudadanía de que ya todo está decidido.

Por otra parte, la contrarreforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales publicada en el *Diario Oficial de la Federación*, llevará al Presidente de la República, así como al PRI y el PAN a buscar que la legislación secundaria se apruebe de inmediato, de manera que estén en condiciones de suscribir a la brevedad, los contratos necesarios con las corporaciones y bancos extranjeros **para tornar irreversible la enajenación del patrimonio nacional.**

En este contexto y ante la magnitud del reto que enfrentamos, en pleno ejercicio de nuestros derechos cívicos fundamentales, consideramos necesario pasar a una etapa superior en la lucha, que incluya acciones como los paros cívicos, las huelgas e incluso la desobediencia civil, partiendo de nuevas formas de articulación incluyentes y plurales del conjunto de la población. No basta con la denuncia, la resistencia y la oposición tradicionales, debemos ser capaces de transitar a nuevas formas de acción política y social que recuperen la visión transformadora de la sociedad, que fortalezcan el compromiso de lucha y que incluyan **un proyecto de Nación propio que redefina el futuro de nuestro país, recuperando y fortaleciendo el sentido social que se pretende cercenar de nuestra Constitución con las reformas neoliberales.**

Este proceso de lucha deberá librarse en varios frentes: para comenzar, realizaremos nuevas jornadas de organización y protesta en momentos significativos como el 18 de Marzo y 20 de Noviembre, fechas memorables que muchos tecnócratas quisieran olvidar por tratarse de la Expropiación Petrolera y del inicio de la Primera Revolución del siglo XX; el 10 Abril en ocasión del artero asesinato de Emiliano Zapata o el Primero de Mayo, en que habremos de denunciar el panorama de precarización, pérdida de puestos de trabajo y de fomento a los contratos de protección patronal que trajo consigo la contrarreforma laboral del 2012, la que, desde el gobierno federal se pretende profundizar, haciendo más agresivas las distintas formas de subcontratación como el *outsourcing* y manteniendo el control corporativo del gobierno sobre los sindicatos.

Seguiremos con especial atención el proceso Legislativo para elaborar las leyes reglamentarias energética, política y de telecomunicaciones, asumiendo las acciones pertinentes a fin de evitar que se consume el despojo del patrimonio de la Nación, o que se continúen vulnerando los derechos ciudadanos.

Convertiremos el acopio de firmas para exigir la consulta, en un primer referéndum que ratifique el amplio rechazo de los mexicanos ante la entrega de los recursos

naturales de nuestra Nación a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Paralelamente desarrollaremos una campaña permanente de organización, convencimiento y lucha social en todos los barrios, escuelas y centros de trabajo para explicar los riesgos que implican la contrarreforma energética y las demás modificaciones constitucionales aprobadas recientemente.

Las dos últimas décadas -con el TLCAN vigente- se han caracterizado por el crecimiento económico mediocre, el incremento de la desigualdad, el desempleo y la informalidad, el colapso del mercado interno y las cadenas productivas, así como la destrucción del tejido social asociada con la espiral de violencia, la marginación, la violación de los derechos humanos, los feminicidios, la trata de personas, el abuso contra menores, la discriminación y marginación de las mujeres; además de la criminalización de la protesta social, como se ilustra con claridad en entidades como Michoacán. Estos son algunos de los saldos de dicho acuerdo comercial y de la aplicación de las políticas neoliberales durante más de treinta años. Son condiciones que tenderán a agravarse con el Tratado Comercial Transpacífico que, sigilosamente, negocia el gobierno mexicano a espaldas de la Nación.

Pero si hay un sector que ha resentido con mayor crudeza esta condición es el campo mexicano, cuyo abandono crónico profundiza la pérdida de la soberanía alimentaria del país. Poco menos de la mitad de los productos que forman parte de la dieta de los mexicanos se importa mientras que los pequeños y medianos productores agrícolas, carecen de los apoyos mínimos necesarios para fomentar cultivos y optimizar sus procesos agrícolas.

El campesinado mexicano, cuya propiedad social representa más de la mitad del territorio nacional, ha sido obligado a dejar de producir, al no existir condiciones de rentabilidad, por lo que México se ha convertido de manera irracional e injusta, en país importador de alimentos al tiempo que seis millones de campesinos han sido expulsados de su actividad fundamental, mientras que ocho millones de hectáreas permanecen ociosas.

Recientemente el gobierno federal anunció que pretende impulsar una reforma del campo. Con este proyecto se busca liquidar la propiedad social en el medio rural (ejidos y comunidades), e indiscriminadamente la explotación de los recursos naturales en favor de las empresas trasnacionales, en particular la minería a cielo abierto, represas hidroeléctricas y parques eólicos despojando a las comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y territorios

Si la transformación del campo no se realiza con la participación de los hombres y mujeres del campo, en especial de los ejidatarios y comunidades indígenas que disponen de la propiedad social de la tierra, bajo condiciones que garanticen la producción nacional de alimentos, el resultado será otra reforma excluyente y pro-empresarial, por lo que nada bueno habrá que esperar de ella en términos de la autodeterminación alimentaria del país.

De allí la necesidad de insistir en la construcción un auténtico pacto rural que se consense con todas la organizaciones campesinas y que ponga el acento en la modernización y en la productividad de las pequeñas y medianas unidades agropecuarias y pesqueras.

Compañeros y compañeras: Con esta **Jornada Nacional de Lucha**, damos una muestra de unidad política para acreditar el amplio rechazo de la mujeres y hombres de nuestra Nación ante la entrega de nuestros recursos e industrias estratégicas a los grandes empresarios, los consorcios trasnacionales y los gobiernos extranjeros; ante las políticas que agudizan la marginación, la desigualdad y la pobreza; ante la pérdida de nuestros derechos sociales y, en síntesis, **ante la transformación de nuestra Nación en una entidad carente de autodeterminación económica y política, condenada perpetuamente a suministrar mano de obra barata y materias primas a las grandes potencias.**

Otro México es posible, por ello, hemos decidido dar la batalla para construir, desde abajo, un nuevo régimen económico, político y social incluyente, sustentado en la democracia participativa, la soberanía, la equidad, la justicia y la inclusión. **Pero para ello, el primer paso es unificarnos, a fin de revertir la contrarreforma energética en curso, evitando que nos arrebaten los instrumentos de decisión ciudadana que necesitamos para alcanzar estos fines.**

¡Por un Programa Nacional de Recuperación Salarial! ¡Revocación de las contrarreformas neoliberales! ¡Consulta Ciudadana sin restricciones! ¡Presos políticos, libertad! ¡Alto a la criminalización de la lucha social! ¡Por un verdadero Pacto Rural! ¡Cancelación de contratos y concesiones que sobre explotan y contaminan los recursos naturales, como la minería a cielo abierto! ¡Respeto a los Derechos Humanos de las y los trabajadores! ¡Presentación con vida de los desaparecidos! ¡Por la construcción de un Pacto Social!